

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE DERECHO**

**REVISTA DE DERECHO
PRINCIPIA IURIS
No. 9**

Tunja, 2008-1

Principia Iuris	Tunja, Colombia	No. 9	pp. 1 - 204	Enero Junio	2008	ISSN: 0124-2067
--------------------	--------------------	-------	-------------	----------------	------	-----------------

Entidad Editora

Universidad Santo Tomás seccional
Tunja

Director

Dr. Ciro Nolberto Güechá Medina

Editor

Dr. Diego Mauricio Higuera Jiménez

Numero de la revista

NUEVE (9)
PRIMER SEMESTRE DE 2008

Periodicidad

SEMESTRAL

ISSN

0124-2067

Dirección postal

Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas.
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.
Calle 19 # 11-64. Tunja, Boyacá, Colombia.

Teléfono

(8) 7440404 Ext. 1024

Correo electrónico

revistaderecho@ustatunja.edu.co
dhiguera@ustatunja.edu.co

Diseñador: Santiago Suárez

Corrector de estilo: José Miguel Gaona

Traducción de textos

Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.
Departamento de Idiomas

Anotación: El contenido de los Artículos es
responsabilidad exclusiva de sus autores.

CONSEJO EDITORIAL

Fray Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Rector Seccional

Fray Tiberio Polanía Ramírez, O.P.
Vicerrector Académico

Fray Erico Juan Macchi Céspedes, O.P.
Vicerrector Administrativo y Financiero

Fray José Antonio González Corredor, O.P.
Decano de División

Dr. Ciro Nolberto Güechá Medina
Decano de Facultad

Dra. Yenny Carolina Ochoa Suárez
Secretaria de División

Dr. Diego Mauricio Higuera Jiménez
Director Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas

COMITÉ CIENTÍFICO

Ph. D. Juan Antonio García Amado
Universidad de León, España

Ph. D. Pierre Subra de Bieusses
Universidad Paris X, Francia

Ph. D. Pablo Guadarrama
Universidad Central de las Villas, Cuba

Ph. D. Jorge Arenas Salazar
Universidad Nacional, Colombia

Ph. D. Carlos Mario Molina Betancur
Universidad Santo Tomás, Colombia

Ph. D. Ricardo Rivero
Universidad de Salamanca, España

COMITÉ EDITORIAL

Ph. D. Ciro Nolberto Güechá Medina
Universidad Externado, Colombia

Ph. D. Nidia Catherine González
Universidad Johannes Gutenberg, Alemania

Ph. D. Ana Yazmin Torres Torres
Universidad Carlos III, España

Mg. Germán Bernal Camacho
Universidad Flacso, México

Mg. Diego Mauricio Higuera Jiménez
Universidad Nancy 2, Francia

COMITÉ EDITORIAL SECCIONAL

Fray Tiberio Polanía Ramírez, O.P.
Vicerrector Académico

Dr. Galo Christian Numpaque Acosta
Director Centro de Investigaciones

Dra. Andrea Sotelo Carreño
Directora Departamento de Comunicaciones y Mercadeo

PARES ACADÉMICOS:

Fray Faustino Corchuelo Alfaro, O.P.
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

Mg. Alejandra Susana Monteoliva
Directora de Posgrados, Pontificia Universidad Javeriana

Mg. Fernando Arias García
Procuraduría General de la Nación- Docente Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

Esp. Miguel Angel García Castellanos
Juez Penal del Circuito Tunja-Docente Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

Mg. Diego Mauricio Higuera Jiménez
Director Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas

CONTENIDO

Editorial 11

Diego Mauricio Higuera Jiménez

Sección I. Artículos de producción institucional

De la moral heterónoma a una Ética Autónoma 21
Róbinson Arí Cárdenas Sierra

La Política Transversal de Equidad de Género. Análisis comparado
de las herramientas más innovadoras para su implantación 31
Hugo Fernando Guerrero Sierra

Presunciones en Contratación Estatal 47
Jorge Enrique Patiño Rojas

Juicio como escenario del Debate Probatorio 69
Alfonso Daza González

El documento electrónico en la legislación colombiana: ¿Confiable
o no en el ejercicio de la actividad comercial? 87
Enrique López Camargo

La Movilidad y la Educación por Competencias en Colombia 101
Carlos Mario Molina Betancur

Sección II. Tema Central- Del pluralismo jurídico al interior del país.

Aporías alrededor del Pluralismo Jurídico: Hacia una configuración
del estado del arte y una crítica de sus supuestos conceptuales 117
Paulo Ilich Bacca Benavides

Principia Iuris	Tunja, Colombia	No. 9	pp. 1 - 204	Enero Junio	2008	ISSN: 0124-2067
--------------------	--------------------	-------	-------------	----------------	------	-----------------

¿Puede la Teoría Poscolonial fortalecer la Teoría Crítica del Derecho?	139
Oscar Andrés López Cortés	

Sección III. Colaboradores Extranjeros

Controverses sùr le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs/ Controversias sobre el control de constitucionalidad de los actos administrativos	175
Franck Moderne	

CONTENTS

Editorial 11

Diego Mauricio Higuera Jiménez

Part I. Research articles. Santo Tomás University

From the heteronymous morals to the Autonomic Ethics 21
Róbinson Arí Cárdenas Sierra

Transversal politics in gender issues (mainstreaming). Comparative
analysis of the most innovative tools for its implementation 31
Hugo Fernando Guerrero Sierra

Presumptions in state contracting 47
Jorge Enrique Patiño Rojas

The electronic document in the colombian law 69
Enrique López Camargo

Prove regime in the colombian criminal procedure 87
Alfonso Daza González

Mobility and education by competences in Colombia 101
Carlos Mario Molina Betancur

Part II. Central topic - From The juridical pluralism inside the country

Contradiction around the Legal Pluralism: Towards a set of state
of the art and criticism of its assumptions conceptual 117
Paulo Ilich Bacca Benavides

¿Can the postcolonial theory strengthen the critical theory of law?	139
Oscar Andrés López Cortés	

Part. III. *International guest articles*

Controversies about the constitutional control of administrative acts	175
Franck Moderne	

EDITORIAL

La academia, en su razón de ser, no basta con ser una transmisora de conocimiento, sino que, a través de la investigación, debe avanzar en el estado del desarrollo intelectual humano para obtener una efectiva contribución al tratamiento de problemas sociales y humanos, así como en la naturaleza; todos los miembros del sistema deben cumplir con su rol, el cual es fundamental en tanto se es parte de un conjunto, la investigación se propone cumplir con una parte del inagotable esfuerzo del proyecto humanista: cohesionar y articular la academia. La investigación y la participación social, deben ser objetivos de todos los desarrollos en la universidad.

En coherencia con los principios anteriores y continuando con nuestro proyecto académico-institucional tenemos el gusto de presentar a la comunidad jurídica e intelectual en general, la revista *PRINCIPIA IURIS* Número Nueve. Esta revista integra los avances investigativos varios trabajos de profesionales, fundamentalmente, de los investigadores de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, así como también de docentes e investigadores de orden nacional e internacional. Estos estudiosos exponen los avances y resultados sus proyectos investigativos como un esfuerzo por apoyar la producción y valoración del conocimiento socio-jurídico en los niveles regional, nacional e internacional, para contribuir a la solución de los problemas sociales con el máximo de calidad analítica y propositiva.

Conforme el formato diseñado, la revista *PRINCIPIA IURIS* Número Nueve presenta seis Artículos de producción institucional: la obtención de una ética de liberación autonómica tras desarrollarse una moral de cumplimiento a las normas y los valores en desarrollo de la voluntad, es expuesta en las reflexiones del profesor

Róbinson Cardenas ; por su parte el docente Hugo Fernando Guerrero presenta de forma comparativa varios modelos de desarrollo de la equidad de género, como una política pública transversal, la cual es reconocida pero no aplicada en Colombia; La contratación estatal es analizada por el docente Jorge Enrique Patiño, quien expone las presunciones aplicables a estos actos jurídicos, partiendo de las más generales a las aplicables a toda la administración *pública*, para llegar a aquellas más específicas en materia de contratación.

La conjunción entre el derecho probatorio y el actual sistema procesal penal son abordados por el profesor Alfonso Daza, examinándose la adaptación a este nuevo ordenamiento; El docente López Camargo cuestiona la fiabilidad del documento electrónico en las actividades comerciales en Colombia, anticipándose a la visión probatoria del documento electrónico en el contexto económico universal de conformidad con la legislación vigente; La necesidad de implementar un sistema educativo flexible que permita desarrollar las habilidades y competencias exigidas por la competitividad de la vida moderna son expuestas por el profesor Carlos Mario Molina Betancur.

En la sección dedicada al tema central, presentamos con agradecimiento, dos interesantes Artículos de prestigiosos colaboradores nacionales: el profesor Paulo Ilich Bacca Benavides nos ofrece en un escrito humanista y reivindicatorio sus estudios sobre la diversidad de los pueblos, exponiendo las contradicciones, aparentemente insuperables, respecto de la posibilidad de desarrollo del pluralismo jurídico en el contexto colombiano contemporáneo. Por su parte, la Teoría Poscolonial es disertada por el profesor Oscar Andrés López Cortés en un Artículo que examina la posibilidad de esta para fortalecer la teoría crítica del derecho, comparando varios de los desarrollos más interesantes en dicha materia.

Con orgullo y agrado presentamos el Artículo de colaboración internacional redactado por profesor emérito de la universidad de París I Franck Moderne, en el cual se exponen las controversias respecto del control de constitucionalidad de los actos administrativos, enfocándolos hacia el derecho público francés contemporáneo desde sus orígenes, hasta llegar a la ampliación de competencias de control del Consejo Constitucional, así como de la Corte Europea de Derechos Humanos. Este Artículo llama la atención de lo internacional en perspectiva de la actualidad en contexto de la comunidad tomasina, a su vez, invitando a todos los nuestros a participar con sus producciones intelectuales en las discusiones académicas de tipo internacional.

En este momento podemos decir que nos encontramos satisfechos, no como quien ha llegado a su meta, lo cual es cuestionable que sea posible, sino como aquel que se ha esforzado en la búsqueda de sus objetivos, el camino que se ha formado, como fin en sí mismo, nos impulsa a seguir adelante en la profundización de nuestros trabajos y en el mejoramiento de los mismos.

Es por esto que la próxima edición de la Revista, cuyo tema central será «la actualidad del derecho público en Colombia», tendrá un espacio dedicado a la investigación formativa, en el cual se publicará los trabajos de grado más destacados entre los estudiantes de los programas de posgrado. A todos los gestores de este proyecto, los profesores investigadores, los colaboradores externos, los comités académicos, administrativos y directivos de nuestra universidad, nuestros sentimientos de profunda gratitud. Esperamos humildemente que esta publicación se acerque a los objetivos aquí plasmados.

Diego Higuera
Editor

SECCIÓN III: COLABORADORES EXTRANJEROS

PART. III: *INTERNATIONAL GUEST ARTICLES*

CONTROVERSAS SOBRE DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONTROVERSES SÛR LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS

Franck Moderne**

Fecha de recibido: 05.08.08

Fecha de aceptación: 15-08-08

RESUMEN *

El derecho administrativo ha sido concebido como un derecho constitucional concretizado, siendo el control de constitucionalidad de los actos administrativos una consecuencia lógica de la constitucionalización del derecho administrativo. Sin embargo en Francia, por principio, el control de constitucionalidad de los actos administrativos es improcedente, habiendo rehusando el Consejo de Estado este control como una consecuencia de la ausencia original de un control de constitucionalidad respecto de las leyes en el sistema francés.

El principio de la tesis se basa en una concepción de aplicación material de la ley, si un acto administrativo desarrolla una ley de la república adoptada por el parlamento, este acto escapa al control de constitucionalidad pues el juez ordinario finalizaría censurando la voluntad del representante de la soberanía, pero este principio se ha mermado en el actual orden jurídico.

El desarrollo dado ha marcado una diferencia con las concepciones y principios tradicionales del derecho francés, en primer lugar, por la constitución vigente de 1958, la cual estableció el Consejo Constitucional que, con el tiempo, empezó a ejercer funciones de control de constitucionalidad, protección jurisdiccional

** *Professeur émérite à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)*

* *Ensayo Jurídico*

efectiva de los mandatos superiores a la cual, en los últimos tiempos se han sumado la aplicación y las decisiones de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE) y la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH). Este desarrollo se encuentra en situación conexas a un punto medular en este tema, la «*revition constitutionnelle du 23 juillet 2008*» la reforma constitucional del veintitrés de julio de 2008, situaciones que han terminado por establecer una viabilidad en ejercicio del control y aplicación de concordancia de las normas superiores en el ordenamiento jurídico franco-europeo.

Sumado a este establecimiento de organismos de control respecto de los mandatos de orden superior, encontramos un avance jurisprudencial de parte del juez administrativo, tanto de instancia como jurisdicción suprema. Vemos entonces como esta evolución se ha gestado, intentando superar una prohibición del esquema tradicional con un mandato del ordenamiento contemporáneo y, más que una abrogación de competencias por parte del juez ordinario, podríamos pensar en una auténtica integración de las ramas del poder público, donde ninguna se encuentra por encima de las otras pero sí interconectadas en sus funciones, especialmente a través del marco jurídico político supremo, la constitución.

PALABRAS CLAVE

Control de constitucionalidad, actos administrativos, unión europea, derecho administrativo francés.

ABSTRACT

The administrative law has been conceived as a concrete constitutional right, being the constitutional control of administrative acts as a logical consequence of the constitution of administrative law, however in France, on principle, the constitutional control of administrative acts is inadmissible, the State Council have refuse this control as a result of an original absence of constitutional control respect to the laws in the french system.

The thesis is based on a conception of application of the law, if an administrative act develops a republic law adopted by parliament; this act is beyond the control of constitutionality because the regular judge would end censuring the will of the representative of sovereignty, but this principle has been eroded in the current legal order.

The development about this topic, has made a difference with the traditional concepts and principles of french law, in the first place by the constitution of 1958 which established the Constitutional Council which began to exercise control of constitutionality, effective judicial protection and in

recent times the implementation and decisions of the Justice Court of European Communities and the European Court of Human Rights. This development is related to a situation in this core issue, the «*révision constitutionnelle du 23 juillet 2008*» a constitutional reform of 23th of July 2008, situations that have been completed to establish a viable exercise in control and implementation of matching the superior standards in the European legal system.

This establishment of monitoring organizations respect of the mandates of higher order we find a jurisprudential breakthrough from the administrative judge, both as a court of first instance,

1. L'ARTICLE:

Le débat sur le contrôle constitutionnel des actes administratifs n'a rien de nouveau dans le droit administratif français contemporain. Que le droit administratif, tel qu'il s'est forgé en France, se trouve étroitement lié au droit constitutionnel constitue une affirmation classique depuis le XIX^{ème} siècle, dans la mesure où le droit administratif a été initialement conçu comme un «*droit constitutionnel concrétisé*», c'est-à-dire comme le développement ou l'application concrète de la Constitution, invitée pour sa part à traiter les problèmes liés à

as higher jurisdiction; then we see this development as it has been brewing, trying to overcome a prohibition of the traditional pattern with a mandate of the contemporary legal system, and more than an abrogation of power from the ordinary judge, we could think of an authentic integration of the branches of public power where none is above the other and which are interconnected in their duties, particularly through the supreme legal and political framework, the constitution.

KEYWORDS:

Constitutionality control, administrative acts, European Union, french administrative law.

l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics dans le contexte d'un Etat de droit – ce qui ne signifie pas que le système de droit administratif serait, dans les pays qui l'ont adopté, la seule réponse juridique possible aux mandats édictés par ladite Constitution.

Dans les Etats qui, comme la France, ont choisi de mettre en place un système de droit administratif spécifique, distinct du droit privé et adapté aux particularités de l'action administrative, le contrôle de la constitutionnalité des actes de l'Administration se présente historiquement comme la conséquence

logique de l'évolution du système et plus particulièrement de la constitutionnalisation progressive de cette branche du droit public.

Le Conseil d'Etat français s'est traditionnellement refusé à opérer une censure du législateur à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, contrôle qu'il était fréquemment invité à opérer dans le cadre de l'examen de la légalité d'un acte administratif. Il avait adopté cette position de principe alors que le système constitutionnel français de l'époque ne prévoyait pas de contrôle direct de la constitutionnalité de la loi par un juge constitutionnel *ad hoc* (ce juge, aujourd'hui dénommé Conseil constitutionnel, n'a été institué que dans le cadre de la V^{ème} République de 1958).

La fermeté de la position du juge administratif en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs qui lui étaient déférés repose sur plusieurs arguments de valeur inégale. Elle connaît toutefois certaines atténuations qui permettent au Conseil d'Etat d'opérer aujourd'hui un certain contrôle de constitutionnalité des actes de l'Administration.

On étudiera donc successivement le principe, qui reste celui du refus d'un

contrôle de la constitutionnalité des actes de l'administration, et les atténuations au principe.

2. LE PRINCIPE: LE REFUS DE CONTROLER LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS

C'est un principe ancien et traditionnel du droit public français: l'acte administratif, pris pour l'exécution d'une loi votée par les représentants du peuple français, devait échapper au contrôle de constitutionnalité, contrôle qui aurait permis au juge ordinaire (juge administratif ou, éventuellement, juge judiciaire) de censurer indirectement le législateur, coupable d'avoir voté une loi inconstitutionnelle. Dans la conception française de la loi et de la hiérarchie normative *lato sensu*, un tel raisonnement se heurtait à des objections non seulement politiques mais théoriques, qui n'ont été surmontées que partiellement et à une date récente.

La persistance du refus du Conseil d'Etat français (notre juge administratif suprême) de s'engager dans la voie, jugée périlleuse, du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs qui lui étaient déférés (directement ou au titre de l'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs, juges de première

instance) est notable: cette attitude de réserve prudente s'est manifestée tout au long de la III^{ème} République (1875-1940) et elle a été maintenue globalement par la suite jusqu'à une date récente.

A- En ce qui concerne les solutions adoptées dans le cadre de la III^{ème} République (1875-1940).

Il faut se référer aux arrêts rendus par le Conseil d'Etat dans des affaires qui ont été jugées en Section du Contentieux le 6 novembre 1938, *Dame Coudert et Sieur Arrighi* (Rec., p.966; D. 1938.J.31, concl. R. Latournerie, note Ch. Eisenmann; S. 1937.3.33, concl. R. Latournerie), qui sont regardés comme des arrêts de principe en la matière.

Cette politique a été constamment réaffirmée depuis lors sous la IV^{ème} puis la V^{ème} République française (on laissera de côté, pour des raisons évidentes, le régime de Vichy, institué entre 1940 et 1945 sous l'égide du Maréchal Pétain, qui ne répondait pas aux exigences minimales d'un régime constitutionnel et démocratique dans des circonstances, il est vrai, exceptionnelles). On mentionnera par exemple l'arrêt d'Assemblée du 20 octobre 1989, *Mme Roujansky* (Rec., p. 135; JCP 1989.II.21371, concl. P. Frydman; RFDA 1989, p. 993).

Elle avait été étendue logiquement aux actes considérés comme ayant force de loi, par exemple les «lois» édictées par

le Gouvernement de Vichy (Cons. d'Et. 22 mars 1944, *Vincent*, Rec., p. 417; S. 1945. p. 353, concl. H. Detton, note R.E. Charlier), les «ordonnances» du Comité Français de Libération Nationale ou du Gouvernement Provisoire de la République Française pendant la période de transition séparant la fin de la II^{ème} Guerre Mondiale et les débuts de la IV^{ème} République (Cons. d'Et. 22 févr. 1946 *Botton*, Rec, p. 58; S. 1946.3.56, note P.H.), les ordonnances prises par le gouvernement en vertu de l'article 38 de la Constitution et ratifiées par le Parlement (Cons. d'Et. 7 févr. 1994, *Ghez*, Rec., p. 55; AJDA 1994, p. 412, note G. Guglielmi; Cons. d'Et. 29 oct. 2004, *Sueur*, Rec., p. 393, concl. D. Casas; BJCP 2005, n°38, p.65, obs. C.M.; AJDA 2004, p.2383, chron. C. Landais et F. Lenica; CMP, déc. 2004, p.20, note G. Eckert; Dr. adm. 2005, n°3, note A. Ménéménis), les lois référendaires (Cons. d'Et., Ass., 19 oct. 1962, *Canal, Robin et Godot*, Rec., p.552; GAJA, 15^{ème} éd. Dalloz 2007, n°83, p. 564, obs. de MM. Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois), les décisions à caractère législatif prises par le Président de la République en vertu de l'article 16 de la Constitution de la V^{ème} République (1958) (Cons. d'Et. Ass., 2 mars 1962, *Rubin de Servens et autres*, Rec., p.143; GAJA n°82, p. 555, obs. de MM. Long, Weil, Braibant, Delvolvé, Genevois; JCP 1962.II.12613, concl. Henry; AJDA 1962. p.214; chron. J.M. Galabert et M. Gentot; D. 1962.J.109, chron. J.

Morange; JCP 1962.I.17111, chron. J. Lamarque; RDP 1962, p. 288, chron. G. Berlia; S. 1962.147, note J. Bourdoncle).

Sur le plan théorique, la question avait été débattue. Le refus du Conseil d'Etat de statuer sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant lui à l'occasion d'un procès administratif n'était-il pas contraire au principe bien connu du droit processuel (qu'il soit public ou privé) selon lequel «*le juge de l'action est juge de l'exception*» - ce qui lui permet de se prononcer sur l'exception éventuellement soulevée devant lui et de régler définitivement le procès? Pourquoi le juge administratif ne bénéficierait-il pas de ce raisonnement? Sous réserve, bien entendu, que la solution retenue n'ait d'incidence que sur le procès en cours?

B-Dans le cadre de nouveaux textes constitutionnels correspondant à la IV^{ème} République (1946-1958) et à la V^{ème} République (1958-2008).

Le refus du juge administratif de contrôler par voie d'exception la constitutionnalité de la loi a été globalement maintenu.

Au demeurant, la Constitution de 1958 (aujourd'hui en vigueur) a organisé un contentieux spécifique de la constitutionnalité de la loi mais elle l'a confié à un juge *ad hoc*, le Conseil constitutionnel, et non au juge de droit commun, administratif ou judiciaire.

Dès lors, le Conseil d'Etat a souligné, dans un arrêt d'Assemblée du 4 février 1949, *Chambre syndicale des agents généraux d'assurance de la Martinique*, (Rec., p. 49), que le moyen fondé sur la contrariété entre une disposition législative et la Constitution «n'est pas de nature à être utilement présenté devant la juridiction contentieuse».

Si le Conseil constitutionnel est spécifiquement chargé du contrôle éventuel de la constitutionnalité des lois, dans le système adopté par les constituants de 1958, ce contrôle s'exerce avant la promulgation du texte législatif et les autres juges ne sauraient lui faire concurrence sur ce terrain par la voie de l'exception.

D'autres arguments ont été invoqués dans le même sens. Par exemple, l'exclusion d'un contrôle de constitutionnalité de la loi par le juge ordinaire (judiciaire ou administratif) permet d'éviter les conflits entre le juge et le législateur et de permettre par exemple au Conseil d'Etat, juge administratif suprême dans l'ordre juridique français, de se consacrer à sa tâche première qui est le contrôle de l'administration - ou encore un tel raisonnement évite au Conseil d'Etat (ou à la Cour de cassation, dans l'ordre judiciaire) d'entrer dans le jeu délicat des appréciations politiques sous le couvert d'un contrôle -même par voie d'exception- de la constitutionnalité de la loi. Le domaine des droits -non

seulement les droits traditionnels mais aussi et surtout les nouvelles libertés économiques et sociales reconnus par les textes constitutionnels de 1946 et 1958 – comporte à et égard bien des incertitudes et des zones d'ombre qui rendent plus aléatoire et plus contestable un contrôle, même indirect, de la constitutionnalité de la loi et son exploitation en dehors de la sphère du droit.

On ne s'étonnera donc pas qu'un arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat en date du 5 mars 1999 *Rouquette* (Rec., p. 37; RFDA 1999, p. 357, concl. Chr. Maugüé, note D. de Béchillon et Ph. Terneyre; RDP 1999, p. 1223, obs. Ph. Camby) ait repris la formulation classique selon laquelle «il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux s'apprécier la conformité de la loi au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques».

Bien que réaffirmé, ce principe va toutefois connaître des atténuations ou limitations qui en réduisent la portée en droit positif français.

3. LES ATTENUATIONS AU PRINCIPE

Diverses atténuations ont été en effet apportées à l'assertion traditionnelle. D'autres sont prévisibles dans le contexte de la dernière révision constitutionnelle. Si le principe est maintenu, sa portée se trouvera très

vraisemblablement amoindrie dans l'ordre juridique qui s'annonce.

Certains modes de raisonnement utilisés par les juges nationaux ont eu pour objectif et pour effet de resituer le problème du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs dans le nouveau contexte politico-juridique de la Constitution de 1958, actuellement en vigueur, en liaison avec les nouvelles données qui résultent de la construction européenne dans ses deux principales dimensions, l'Europe communautaire et l'Europe des droits de l'homme, dotées l'une et l'autre d'une protection juridictionnelle effective et efficace, par le biais de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

D'autres facteurs, liés à la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, joueront vraisemblablement un rôle important dans l'évolution qui nous paraît la plus probable.

A-Les techniques jurisprudentielles favorisant l'intervention du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité des actes administratifs.

Plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat français ont permis à notre juge administratif de pénétrer (au moins partiellement) dans un domaine qui paraissait lui être interdit *a priori*.

On se bornera à les mentionner, sans entrer dans le détail de l'analyse.

Certaines de ces techniques relèvent de politiques jurisprudentielles élaborées par le Conseil d'Etat lui-même ou de pratiques des gouvernements en place quant au maniement de la distinction loi-règlement, qui est l'un des axes majeurs de notre système juridique dans le contexte de la Constitution de 1958.

D'autres font intervenir des conceptions remaniées de la hiérarchie normative, en liaison notamment avec l'insertion de la France dans l'ordre juridique communautaire.

1° - Les considérations afférentes au jeu des normes internes.

Il est évident que les interventions respectives du juge constitutionnel français (le Conseil constitutionnel) et du juge administratif (le Conseil d'Etat) sont tributaires au premier chef de la division constitutionnelle classique entre la loi et le règlement, laquelle constitue l'un des apports essentiels de la Constitution française de 1958 dans le champ de la théorie des normes.

Il est non moins évident que la manière dont le juge saisi examine les actes qui lui sont déférés a également une incidence sur la portée du contrôle de

constitutionnalité susceptible d'être exercé.

a) La répartition des matières entre la loi et le règlement a fait l'objet en droit français, d'abondantes controverses, dans le contexte de la nouvelle Constitution de 1958.

Il est évidemment que la rédaction de la nouvelle charte constitutionnelle, liée à l'avènement de la V^{ème} République, allait donner lieu à des interprétations évolutives susceptibles d'influer immédiatement –et d'une manière décisive– sur la répartition des compétences entre le juge constitutionnel (juge de la loi) et le juge administratif (juge des actes administratifs).

La qualification exacte de l'acte litigieux au regard de la distinction constitutionnelle entre loi et règlement est en effet déterminante quant à la nature du contrôle juridictionnel exercé. La politique jurisprudentielle en la matière est de nature à exposer ou à soustraire l'acte en cause à un examen de constitutionnalité.

C'est ainsi que la politique des «*ordonnances*», actes pris par le pouvoir exécutif dans des domaines relevant normalement de la compétence du législateur, et avec l'autorisation expresse de celui-ci (on parle parfois de «*législation administrative*»), conduit inévitablement à une intervention au contentieux du juge administratif, juge

naturel de l'exécutif. On songe particulièrement aux ordonnances prises par le gouvernement en vertu d'une autorisation expresse du législateur (art. 38 de la Constitution de 1958) (v. en ce sens Cons. d'Et., Ass., 24 nov. 1961, *Fédération Nationale des syndicats de police*, Rec., p. 658; AJDA.1962, p. 114, note J.T.; S. 1963, p. 59, note L. Hamon; D. 1962.J.424, note M. Fromont; Cons. d'Et. 29 oct. 2004, *Sueur*, Rec., p.393, concl. D. Casas., obs. C.M.; AJDA 2004, p. 2383, chron. C. Landais et F. Lenica; Cah. march. publ. déc. 2004, p. 20, note G. Eckert; Dr. adm. 2005, n°3, 4 et 5, note A. Ménéménis, etc.). Mais ce n'est pas là un exemple unique (v. N. Molfessis, «Les ordonnances de la XII^{ème} Législature 2002-2007; l'avènement de la législation administrative», Dossier spéc. Législation, Jurisclasseur, sept. 2007, p. 1)¹.

La recevabilité du recours pour excès de pouvoir a été ainsi admise à propos d'autres actes relevant sans doute du domaine de la loi mais pris par des autorités administratives dûment habilitées à cet égard.

Dans le même ordre d'idées, le basculement d'un acte d'une catégorie dans l'autre, à la suite d'une intervention du juge constitutionnel appelé à déterminer s'il s'agit d'un acte administratif ou d'un acte législatif, est de nature à provoquer ou à interdire le

contrôle du juge administratif ou celui du juge constitutionnel. Une certaine marge de manœuvre est ainsi laissée au juge constitutionnel en ce qui concerne par exemple la nature des décrets pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par la loi de référence: le Conseil constitutionnel y a vu en définitive des actes de nature réglementaire, relevant au contentieux à ce titre du juge administratif – et non des actes de nature législative susceptible d'un contrôle de constitutionnalité par le juge constitutionnel normalement compétent.

b) Il appartient par ailleurs au juge ordinaire de contrôler lui-même l'existence de la loi. Ce pouvoir lui a été reconnu depuis le siècle dernier au profit du juge pénal (Crim. 11 mai 1833, S. 1833.1.357, concl. Voysin de Gartempe), et au profit du juge administratif (Cons. d'Et. 2 déc. 1854, *Dame Vve Massois*, DP 1858.5.568).

Le juge ordinaire s'est également attribué le droit de déclarer abrogée une loi dont le maintien dans l'ordre juridique n'eût pas été aisément compatible avec l'édition d'un nouveau texte constitutionnel. Le Conseil d'Etat, tout comme la Cour de Cassation, ont utilisé à l'occasion ce procédé (B Genevois, «*Le Conseil d'Etat n'est pas le censeur de la loi au regard de la*

¹ On rappellera à ce propos que la ratification des ordonnances prises par le gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution a pour objet de leur conférer la qualité d'actes législatifs, échappant ainsi au contrôle de légalité exercé par le juge administratif; les ordonnances prises par le Président de la République dans le cadre de circonstances exceptionnelles relèveraient de la même analyse.

Constitution», RFDA 2000, p.715 s., not. p. 720).

c) On observera enfin que les techniques d'interprétation adoptées par le juge administratif ou judiciaire dans le contexte de leurs compétences juridictionnelles respectives, peuvent contribuer à mieux situer l'acte contrôlé dans l'ordre juridique, et ont ainsi indirectement une incidence sur le problème du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs. Mais ces techniques ne jouent qu'un rôle d'appoint (B. Genevois, *op. cit.*, p. 721 et les arrêts cités).

2° - Les considérations liées à l'insertion de la France dans l'ordre juridique communautaire européen

On fait allusion ici à un arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat en date du 8 février 2007, *Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres* (RFDA 2007, p. 601, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier; AJDA 2007, p.577, chron. F. Lenica et J. Boucher; D. 2007.J.2742, étude P. Deumier; JCP-Adm-Coll. terr. 12 févr. 2007, n°7, p. 3; RDP 2007, p. 1031, étude J. Roux; RFDA 2007, p. 384, concl. M. Guyomar; *ibid.*, p. 789, étude M. Canedo-Paris ; *ibid.*, p. 564, étude A. Levade; Europe mars 2007, n°3, étude D. Simon; RDEP 2007, n°6, p. 298, note B. Plessix), dans lequel le Conseil d'Etat a accepté de contrôler la constitutionnalité du droit communautaire dit «*dérivé*», à l'occasion

d'un recours contre un règlement de transposition d'une directive communautaire. La haute juridiction administrative française a accepté de contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif interne, un règlement de transposition d'une directive communautaire (dont il reconnaîtra en définitive la validité). Certes, il ne s'agit pas d'un contrôle de constitutionnalité de la loi elle-même et la primauté de la Constitution française dans l'ordre juridique interne n'est pas remise en cause: le litige portait sur la légalité d'un décret pris pour l'application d'une directive communautaire et relatif à un système d'échange de quotas d'émission de gaz dits «*à effet de serre*», c'est-à-dire susceptibles d'accentuer le réchauffement de l'atmosphère et d'avoir ainsi une incidence sur le développement de la vie animale et végétale à la surface de la planète. Le décret, selon les requérants, était contraire notamment à certains principes constitutionnels parmi les plus classiques (le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité); ils en avaient demandé l'abrogation aux autorités administratives compétentes et ils attaquaient le silence que leur avaient opposé lesdites autorités.

Or le décret dont l'abrogation était demandée était la réplique exacte de la directive communautaire du 25 octobre 2003 (directive n°2003/87 CE), relative à un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, dans le

cadre de l'Europe communautaire – de sorte que le contrôle du décret impliquait indirectement mais nécessairement celui d'une directive communautaire au regard de la Constitution française; en l'absence de toute loi de transposition de la directive en cause, le juge administratif était amené à contrôler de ce fait la constitutionnalité de la directive de référence; le décret de transposition directe n'étant pas protégé par une loi-écran, sa constitutionnalité pouvait être directement contestée devant le juge compétent, c'est-à-dire ici le juge administratif.

Le contrôle de constitutionnalité opéré dans ces conditions par la juridiction administrative met en jeu l'article 88-1 de la Constitution française du 4 octobre 1958 (révision constitutionnelle de 1992), selon lequel «*la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les instituent, d'exercer en commun certaines de leurs compétences*». De cet article découle, rappelons-le, une exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires (Cons. const. 10 juin 2004, Loi sur la confiance dans l'économie numérique, Rec., p.101; RFDA 2004, p. 651, obs. B. Genevois; AJDA 2004, p. 1534, notes J. Arrighi de Casanova, M. Gautier et F. Melleray;

ibid., p.1937, note D. Chamussy; D. 2005.J.199, note S. Mouton; RFDA 2005, p. 465, étude P. Cassia; RFDC 2005, p. 147, étude O. Dupéré; RTDE 2005, p. 597, étude E. Sales; v. aussi Cons. const. 27 juill. 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, D. 2006.J.2878, note X. Magnon; Dr. adm. 2006, n° 155, note P. Cassia et E. Saunier-Cassia).

On rappellera à cet égard que le juge constitutionnel s'est reconnu compétent, dans cette dernière décision, pour vérifier que le texte de transposition n'allait pas «à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France», - et qu'il ne comportait pas de dispositions manifestement incompatibles avec le contenu de la directive à transposer (Cons. const. 30 nov. 2006, Loi relative au secteur de l'énergie; RJEP 2007, p. 41, note P.A. Molina; Contrats et marchés publics 2007, comm. 24, note G. Eckert; JCP,A.2014, note G. Drago; JCP 2007.J.120, chron. B. Plessix; AJDA 2007, p. 192; ibid., p.473, note G. Marcou; Petites Affiches 7 mars 2007, p. 4, note G. Quiot).

La signification de la politique jurisprudentielle du Conseil d'Etat a fait l'objet de controverses: la haute juridiction administrative exerce ce nouveau contrôle d'un décret de

transposition d'une directive communautaire en acceptant de donner sa pleine portée à la primauté du droit (et du juge) communautaire; elle se heurte en conséquence au principe de suprématie constitutionnelle dans l'ordre juridique interne. Si la règle constitutionnelle ainsi heurtée par la directive à transposer est spécifique à l'ordre juridique français, elle l'emportera sur la directive contestée; si cette règle n'est pas spécifique et trouve une protection équivalente dans le droit communautaire, le contrôle de constitutionnalité du décret de transposition s'efface au profit des mécanismes de contrôle internes à l'ordre juridique communautaire. Ainsi le juge administratif national est invité, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret de transposition attaqué devant lui, à rechercher si la directive transposée est ou non conforme à la règle ou au principe général du droit communautaire servant de référence adéquate (s'il y a lieu, il conviendra de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes); en revanche, en l'absence de règle ou de principe général du droit communautaire susceptible de servir de référence, «*il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées*».

La solution n'est applicable que dans l'hypothèse où la transposition de la

directive communautaire est opérée directement en droit interne par un acte de nature réglementaire, sans qu'une loi de transposition soit susceptible de faire écran entre la directive à transposer et l'acte réglementaire attaqué pris pour l'application de la loi de transposition.

On observera au passage que le juge administratif, dans l'arrêt du 8 février 2007, *Société Arcelor-Atlantique et Lorraine et autres*, ne fait pas allusion aux règles et principes inhérents à «*l'identité constitutionnelle de la France*», notion il est vrai difficile à appréhender, mais préfère se référer à des principes plus concrets et donc, *a priori*, plus faciles à mettre en œuvre par le juge compétent.

D'autres éléments du débat sont à prendre en considération avec l'adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

B-Les incidences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 porte révision de la Constitution de 1958 dans l'objectif d'une modernisation des institutions de la V^{ème} République (v. par ex. le dossier Semaine juridique du 30 juillet 2008, et notamment A. Roux, «*Le nouveau Conseil constitutionnel. Vers la fin de l'exception française*» *ibid.*I, 175)

Dans la conception traditionnelle du droit administratif français, on le sait, le Conseil d'Etat en tant que juge administratif n'est pas chargé du contrôle de constitutionnalité de la loi. Il exerce sans doute une fonction contentieuse en sa qualité de juge administratif, mais son contrôle porte sur les actes administratifs pris pour l'application des lois votées par le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution. C'est le Conseil constitutionnel –et seulement depuis la Constitution de 1958, celle de la V^{ème} République, qui est chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois, et encore ce contrôle doit-il être préventif, c'est-à-dire être exercé avant la promulgation de la loi contestée. La loi promulguée échappe donc en principe à tout contrôle de constitutionnalité.

Cela dit, la révision constitutionnelle adoptée par la loi du 23 juillet 2008 a modifié quelques aspects du problème, en instituant notamment une question préjudicielle de constitutionnalité, dire parfois (mais à tort) «*exception d'inconstitutionnalité*»².

Selon le nouveau système (art. 61-1 de la Constitution), «*lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux*

droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé». Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Aux termes de l'article 62 nouveau de la charte constitutionnelle, «*Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles des effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.*

On rappellera par ailleurs que les «*décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours*» et qu'«*elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles*» (art. 62, al. 3 de la Constitution).

Il faut donc attendre qu'une loi organique vienne préciser les modalités de fonctionnement du nouveau système –et il faudra également attendre une jurisprudence significative

² A Roux («Le nouveau Conseil constitutionnel. Vers la fin de l'exception française», *JCP*, ed. G., 30 juill. 2008, n°31-35, I, 175) fait observer avec raison que l'expression «exception d'inconstitutionnalité» devrait être réservée aux systèmes qui, tel le système appliqué aux Etats-Unis, permettent «au juge de l'action d'être également juge de l'exception» -ce qui n'est pas le cas dans le nouveau système français (entre autres), où le juge saisi d'un recours en tant que juge du fond doit renvoyer la question de constitutionnalité dont il est saisi par voie «d'exception» au juge spécifiquement chargé du contrôle de la constitutionnalité (v. aussi G. Alberton, «Peut-on encore dissocier exception d'inconstitutionnalité et exception d'inconventionnalité?», *AJDA* 26 mai 2008, p. 967 s.).

du Conseil constitutionnelle pour en tirer les premiers enseignements. Pour l'instant, on en est réduit aux conjectures.

La question préjudicielle de constitutionnalité devrait permettre en toute hypothèse de combler une lacune dans notre Etat de droit:

- Les normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées à l'encontre de la loi dont la constitutionnalité est ainsi contestée sont toutes celle qui figurent dans le corps même de la Constitution, mais aussi celles du Préambule et, par l'intermédiaire de celui-ci, celles de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, celles du Préambule de Constitution de 1946 (IV^{ème} République) et celles de la Charte de l'Environnement de 2003;

- Une disposition ainsi déclarée inconstitutionnelle sur renvoi préjudiciel se trouve *ipso facto* abrogée, mais il appartient au juge constitutionnel de déterminer éventuellement de manière plus précise les effets de cette abrogation, qui n'est pas nécessairement immédiate.

- Le juge constitutionnel ne pourra être saisi que sur le renvoi du Conseil D'Etat (juge suprême dans l'ordre administratif) ou de la Cour de cassation (juge suprême dans l'ordre judiciaire). Il appartient donc à ces

hautes juridictions d'assurer un filtrage des recours en se prononçant sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui leur seraient adressées sur ce terrain par les justiciables.

Il est difficile, en l'absence actuelle de loi organique précisant les modalités d'application des nouvelles dispositions constitutionnelles, de déterminer avec exactitude dans quelle mesure la pratique de la question préjudicielle de constitutionnalité influera sur les modalités du contrôle de constitutionnalité des actes administratifs. Mais il paraît évident que si le juge saisi de la légalité d'un acte administratif estime que cet acte a été pris dans le cadre et pour l'application d'une loi fortement suspectée d'inconstitutionnalité, il aura la tentation de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, selon le cas, pour les inviter à soumettre la difficulté au Conseil Constitutionnel.

On peut donc admettre *a priori* que la dernière réforme constitutionnelle aura pour incidence inévitable, à court ou à moyen terme, de renforcer le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires et, par ce biais, des actes administratifs pris pour l'application de ces lois.

Acceptons-en l'augure.

Comme on le voit, le système français de contrôle de la

constitutionnalité des actes administratifs est en pleine mutation.

Les instruments de ce contrôle se sont diversifiés. Le juge constitutionnel, saisi par la voie de la question préjudicielle de constitutionnalité, devra élaborer et affiner une politique cohérente en la matière. Il appartiendra aux juridictions administratives et judiciaires, dans le cadre de leurs compétences respectives, de déterminer, en amont, quels sont les textes législatifs qui leur paraissent mériter un examen spécifique de constitutionnalité et, en aval, quelles seront les conséquences immédiates ou médiales d'une déclaration d'inconstitutionnalité.

Il conviendra également d'intégrer dans le nouveau dispositif les données apportées à un titre ou à un autre par les juridictions européennes et notamment par la Cour de Justice des Communautés Européennes ou par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Des adaptations, des mises au point, des réorientations, voire des révisions, sont donc à prévoir dans notre système juridique. La France est aujourd'hui entrée à cet égard dans une ère de turbulence.

Franck Moderne

INSTRUCTIVO PARA AUTORES PRINCIPIA IURIS

Principia Iuris es la revista institucional impulsada por la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, y su cuerpo docente, con periodicidad semestral, que publica artículos inéditos como producto definitivo o parcial de los resultados de investigaciones en el campo Socio-Jurídico, así como reflexiones y memorias en las áreas del conocimiento social, histórico, cultural y político, con el propósito de hacerlos visibles ante la comunidad nacional e internacional, en un esfuerzo por socializar los resultados en las investigaciones de la comunidad académica y con la expectativa de contribuir con el desarrollo del bienestar social.

Criterios de los artículos que se presenten a consideración del comité editorial para su publicación:

1. Los artículos deben ser originales y contener una extensión de 12 a 25 páginas, en formato carta, fuente Arial 12, espacio 1 y ½ y con márgenes no inferiores a 3 cm.
2. En una nota o pie de página superpuesta al nombre del autor al inicio del artículo, debe mencionarse cargo e institución en que labora, máximo título académico obtenido, correo electrónico, nombre del proyecto y estado de la investigación, grupo de investigación al cual pertenece y la clase de artículo que es.

(Lo anterior teniendo en cuenta la tipología de COLCIENCIAS:

- **Artículo de investigación científica y tecnológica:** presenta, **de manera detallada**, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. Estructura: **introducción, metodología, resultados y conclusiones.**
- **Artículo de reflexión:** presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a **fuentes originales.**
- **Artículo de revisión:** resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas

o no publicadas, sobre un campo en ciencia, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos **50 referencias.**)

3. Presentación del artículo con título (15 palabras máximo), subtítulo opcional y nombre del autor.
4. El cuerpo del artículo debe contener las siguientes características:
 - Resumen (no podrá ser inferior a 100 ni tampoco exceder 200 palabras)
 - Palabras Clave: se deben registrar mínimo 4, máximo 7 palabras.
 - Abstract: Será la traducción del resumen, en la que el autor vele por conservar el sentido del mismo.
 - Keywords: Debe corresponder a las palabras clave consignadas en español conservando la esencia del significado en el texto.
 - Introducción
 - Desarrollo del trabajo
 - Resultados (sólo en el caso de un artículo de investigación).
 - Conclusiones
 - Bibliografía
5. Referencias Bibliográficas: Se utilizará el sistema APA (American Psychological Association) para las citas de referencia, como aparece en la revista IUSTA No. 29 páginas 163 - 168:

CITAS DE REFERENCIA EN EL TEXTO (Cita textual)

El estilo APA requiere que el autor del trabajo documente su estudio a través del texto, identificando autor y fecha de los recursos investigados. Este método de citar por autor fecha (apellido y fecha de publicación), permite al lector localizar la fuente de información en orden alfabético, en la lista de referencias al final del trabajo.

A. Ejemplos de citar en el texto una obra por un autor:

1. De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de ocio...
2. En un estudio sobre la influencia del trabajo sobre los estilos de ocio... (Meléndez Brau, 2000).
3. En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de ocio y el trabajo...

Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, como ocurre en el ejemplo **1.**, se incluye solamente el año de publicación de artículo entre paréntesis. En el

ejemplo 2., el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, por consiguiente se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma. Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración (ejemplo 3.), en cuyo caso no llevan paréntesis.

B. Obras con múltiples autores:

1. Cuando un trabajo tiene dos autores (as), siempre se cita los dos apellidos cada vez que la referencia ocurre en el texto.
2. Cuando un trabajo tiene *tres, cuatro o cinco autores*, se citan todos los autores la primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo trabajo, se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de la frase «et al.» y el año de publicación.

Ejemplos:

Ramírez, Santos, Aguilera y Santiago (1999) encontraron que los pacientes... (primera vez que se cita en el texto).

Ramírez et al. (1999) concluyeron que... (próxima vez que se menciona en el texto).

3. Cuando una obra se compone de seis o más autores (as), se cita solamente el apellido del primer autor seguido por la frase «et al.» y el año de publicación, desde la primera vez que aparece en el texto. (En la lista de referencias, sin embargo, se proveen los apellidos de todos los autores.)
4. En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en una misma referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis.

Ejemplo:

En varias investigaciones (Ayala, 1994; Conde, 1996; López & Muñoz, 1999) concluyeron que...

C. Citas literales:

Todo el texto que es citado directamente (palabra por palabra) de otro autor requiere de un trato diferente para incluirse en el texto. Al citar directamente, se representa la cita palabra por palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página en donde aparece la cita.

1. Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se incorporan a la narrativa del texto entre comillas. Las normas de la APA no aclaran si ese texto debe ir en cursiva o no, desde mi punto de vista si el texto va corrido dentro de un párrafo más amplio se deja en letra normal, pero si se destaca con dos puntos y aparte entonces debe poner en cursiva.

Ejemplo:

«En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas» (Ferrer, 1986, p.454).

2. Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva, sangrando las mismas y subsiguientes líneas a cinco espacios (se puede utilizar el Tabulador). El bloque citado se escribe a doble espacio.

Ejemplo:

Miele (1993) encontró lo siguiente:

El «efecto de placebo» que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando las conductas fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron exhibidas de nuevo aún cuando se administran drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto placebo (p. 276).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AL FINAL DEL DOCUMENTO

La lista bibliográfica según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que aparecen en el texto del trabajo. Solamente se incluyen aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación y preparación del trabajo y que, por tanto, están citados en el cuerpo del mismo tal y como se veía en el apartado anterior.

- La lista bibliográfica se titulará: **Referencias bibliográficas** o **Referencias**.
- La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor y se incluye con las iniciales de sus nombres de pila.
- Debemos sangrar la segunda línea de cada entrada en la lista a cinco espacios (utilice la función sangría francesa del procesador de palabras).

- Los **títulos de revistas o de libros** se ponen en letra itálica; en el caso de revistas, la letra itálica comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen (incluye las comas antes y después del número del volumen).
- Se deja un solo espacio después de cada signo de puntuación.

Formatos básicos generales

Publicaciones periódicas (revistas)

Autor, A.A. (año). Título del artículo. *Título de la revista, volumen, páginas.*

Publicaciones no periódicas (libros)

Autor, A.A. (año). *Título de la obra.* Lugar de publicación: Editor o casa publicadora.

EJEMPLOS DE REFERENCIAS

Revistas profesionales o «journals»

Artículo con dos autores:

- Campoy, T.J. y Pantoja, A. (2005). Hacia una expresión de diferentes culturas en el aula: percepciones sobre la educación multicultural. *Revista de Educación*, 336, 415 – 136.

Artículo con un solo autor:

- Pantoja, A. (2005). *La acción tutorial en la universidad: propuestas para el cambio.* Cultura y Educación, 17 (1), 67-82.

Revista popular (magacín)

- Sánchez, A. (2000, mayo). Bogotá: La capital más cercana a las estrellas. *Geomundo*, 24, 20-29.

Se incluye la fecha de la publicación – el mes en el caso de publicaciones mensuales y el mes y el día en el caso de publicaciones semanales. Se incluye número de volumen

Artículos de periódicos

- Ferrer, M. (2000, 14 de julio). El centro de Bellas Artes escenario para 12 estrellas de ópera. *El San Juan Star*, p.24

Ejemplos de referencia a libros

- Pantoja, A. (2004). *La intervención psicopedagógica en la Sociedad de la Información. Educar y orientar con nuevas tecnologías*. Madrid: EOS.

Libro con nueva edición:

- Match, J. E., & Birch, J. W. (1987). *Guide to successful thesis and dissertation* (4th ed). New York: Marcel Dekker.

Libro con autor colectivo (agencia de gobierno, asociaciones, institutos científicos, etc.):

- American Psychological Association. (2001). *Publication manual of the American Psychological Association* (5th ed.). Washintong, DC: Author.
- Cuando el autor y editor son los mismos, se utilize la palabra **Authot** (Autor) para identificar la casa editora.

Enciclopedia:

- Llorca, C. (1991). Revolución Francesa. En *Gran enciclopedia RIALP*. (Vol. 20, pp. 237-241). Madrid: Ediciones RIALP.

Tesis de maestría no publicada

- Rocafort, C. M., Sterenberg, C., & Vargas, M. (1990). *La importancia de la comunicación efectiva en el proceso de una fusión bancaria*. Tesis de maestría no publicada, Universidad del Sagrado Corazón, Santurce, Puerto Rico.

Recursos electrónicos

La World Wide Web nos provee una variedad de recursos que incluyen artículos de libros, revistas, periódicos, documentos de agencias privadas y gubernamentales, etc. Estas referencias deben proveer al menos, el título del recurso, fecha de

publicación o fecha de acceso, y la dirección (URL) del recurso en la Web. En la medida que sea posible, se debe proveer el autor del recurso.

Documentos con acceso en el World Wide Web (WWW):

- Brave, R. (2001, December 10). *Governing the genome*. Retrieved June 12, 2001, from <http://online.sfsu.edu/%7Erone/GEessays/GoverningGenome.html>
- Suñol, J. (2001). *Rejuvenecimiento facial*. Recuperado el 12 de junio de 2001, de <http://drsunol.com>
- Artículo de revista localizado en un banco de datos (ProQuest):
- Lewis, J. (2001). Career and personal counseling: Comparing process and outcome. *Journal of Employment Counseling*, 38, 82-90. Retrieved June 12, 2002, from <http://proquest.umi.com/pqdweb>
- Artículo de un periódico en formato electrónico:
- Melvilla, N. A. (2002, 6 de junio). Descubra los poderes del ácido fólico. *El Nuevo Día Interactivo*. Recuperado el 12 de junio de 2002, de <http://endi.com/salud>

Documentos jurídicos y gubernamentales de Colombia:

- Colombia, congreso Nacional de la República (2005, 29 de Junio), «Ley 960 del 28 de Junio de 2005, por medio de la cual se aprueba la Enmienda del `Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agoten la capa de ozono`, adoptada en Beijing, China, el 3 de Diciembre de 1999", en Diario Oficial, núm. 45.955, 30 de Junio de 2005, Bogotá.
- Colombia, Ministerio del Interior (2005, 29 de Febrero), «Decreto número 321 del 25 de Febrero de 2005, por el cual se crea la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario», en Diario Oficial, núm. 25.659, 5 de Julio de 2005, Bogotá.
- Colombia (1997), constitución Política, Bogotá, Legis.

- Colombia, Corte Constitucional (1995, octubre), «Sentencia C – 543», M. p. Hernández Galindo, J. G., Bogotá.
- Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2005), «Estándares para el Currículo de lengua castellana» [documento de trabajo].
- Colombia (2005), Código Penal, Bogotá, Temis. (Fin cita textual)

FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES

Las fotografías, ilustraciones y gráficos deberán enviarse en archivos independientes del texto principal. También deberán ser identificadas como «figura» y enumeradas según el orden de utilización en el texto. La buena calidad de las ilustraciones, en la publicación se debe a la calidad de archivo enviado por el autor. Cada ilustración debe tener un pie de imagen que de cuenta de su providencia.

1. Entregar la carta de aceptación de condiciones de la revista y autenticidad del contenido del artículo.
2. Observaciones Generales.
3. Fechas y entrega de artículos.
4. Los artículos deben hacerse llegar en medio impreso y magnético al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. Correo electrónico: revistaderecho@ustatunja.edu.co.

El comité editorial de la revista seleccionará los artículos para publicación con base en los conceptos emitidos por pares académicos en calidad de evaluadores anónimos, y en el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido, los trabajos que no sean seleccionados, podrán ser publicados en oportunidades posteriores.

5. La revista se publica en los meses de junio y diciembre, razón por la cual los artículos pueden hacerse llegar al editor en cualquier época del año.

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE ARTÍCULO PRESENTADO

Titulo del artículo que se presenta:

Área: _____

Autor: _____

Fecha de presentación: _____

Por medio de esta comunicación certifico que el artículo que estoy presentando para posible publicación en la revista institucional impulsada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, Principia Iuris , es de mi entera autoría, siendo sus contenidos producto de mi directa contribución intelectual.

Todos los datos y referencias a publicaciones hechas están debidamente identificados con su respectiva nota bibliográfica y en las citas que se destacan como tal.

Por todo lo anterior, declaro que el material presentado se encuentra conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, y por lo tanto, me hago responsable de cualquier reclamación relacionada a esta.

En caso de que el artículo presentado sea publicado, manifiesto que cedo plenamente a la Universidad Santo Tomás seccional Tunja los derechos de reproducción del mismo. Como contraprestación de la presente cesión, declaro mi conformidad de recibir (5) ejemplares del número de la revista en que aparezca mi artículo.

El autor, _____ El editor, _____

C.C. _____ C.C. _____

INSTRUCTIVOS PARA PARES EVALUADORES

Formato de evaluación de artículos REVISTA PRINCIPIA IURIS

ISSN 0124-2067

1. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR

Nombre completo: _____

Lugar de trabajo: _____

Cargo: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Mail: _____

Título Pregrado: _____

Títulos (s) Posgrado: _____

Áreas de Especialidad _____

Fecha recepción: _____

Fecha de devolución: _____

Título del Artículo: _____

2. EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO

2.1 TIPO DE ARTÍCULO (señale con x)

- Artículo de investigación
- Artículo de reflexión
- Artículo de revisión
- Otros (indique cuál)

2.2 INTERÉS PARA EL LECTOR (Señale con x)

- Aporte de nuevos datos e información
 - Aporte nuevas interpretaciones o argumentaciones
 - Aporte por compendio, síntesis o revisión
 - Aporte teórico
 - Aporte metodológico
 - Revisión exhaustiva de bibliografía
 - Sin mucho interés
 - Otro comentario:
-
-

2.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO: Califique de uno (mínimo) a cinco(máximo) cada uno de los siguientes criterios:

- ¿El artículo hace una nueva e importante contribución al conocimiento por medio de material empírico y/o conceptual, o como síntesis teórica?
()
- ¿El artículo logra el objetivo planteado?
()

- ¿El problema sobre el que trata está planteado de manera clara en la introducción?
()
- ¿Las conclusiones y los resultados se relacionan con el objetivo?
()
- ¿La presentación del argumento es clara y coherente?
()
- ¿El argumento sustenta la conclusión?
()
- ¿El material está presentado de manera efectiva y es adecuado para sustentar la discusión?
()
- ¿Presenta estudios anteriores y debates sobre el tema?
()
- ¿Las interpretaciones son convincentes?
()
- ¿El artículo contiene, según su conocimiento, omisiones significativas o errores?
- ¿Hay partes del argumento que son potencialmente erróneas, vagas o no suficientemente precisas?
()
- Otro comentario

2.4 SOBRE LA FORMA DEL ARTÍCULO

- ¿El título y el resumen reflejan adecuadamente el contenido del artículo?
(Si _No_)
- ¿Sugiere algún cambio? _____
- ¿Las palabras clave son adecuadas y suficientes? (Si _ No _)
- ¿Sugiere algún cambio? _____
- ¿La longitud es adecuada? (Si _ No _)
- ¿Sugiere algún cambio? _____
- ¿Da el/la autor(a) demasiadas referencias o muy pocas? (Si _ No _)

- ¿Son estas apropiadas para los puntos que intenta hacer en el texto? (Si _ No _)
- ¿Hay errores obvios en la bibliografía? (Si _ No _)
- ¿Se omiten fuentes importantes? (Si _ No _)

2.5 RECOMENDACIONES PARA EL EDITOR (Señale con x)

- Publicable sin modificaciones
 - Publicable con modificaciones (se indican abajo)
 - No publicable (se indica abajo la razón)
-
-

2.6 RECOMENDACIONES PARA EL AUTOR

Recomiende cambios puntuales, indicando los apartes del artículo en que deberían introducirse, o cambios generales en cuanto a estructura del documento:

Comentarios (use papel adicional si lo requiere)

Firma:

Esta revista se terminó de imprimir
en los talleres gráficos de:



GRAFILASSER

Editores • Impresores

☎s 7431272 / 7447637

TUNJA - BOYACÁ